

ner en vigor, se vulnera la garantía consignada en el artículo 27 de la Constitución federal, violándose también la que otorga el artículo 16, al exigírseles ese impuesto sin causa alguna legal. Visto el fallo de 1ª instancia con lo demás que se tuvo presente y ver convino.

Y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 16, 27 y 101 de la Constitución de la República, se decreta: que por sus mismos legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 1º suplente de Distrito de Sinaloa en 23 de Mayo del presente año, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á la casa de comercio J. de la Quintana y compañía de que es socio gerente D. J. Marcelino Gonzalez de Lopidana, contra el embargo hecho por el C. Tesorero del Estado, exigiendo como rezagos del préstamo decretado en 12 de Noviembre de 1871, la cantidad de mil doscientos nueve pesos cincuenta centavos.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 15 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el C. Lucas Perez, contra los procedimientos del Receptor de rentas del Mineral del Monte, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Se ha impuesto el Promotor de los hechos que motivan el presente juicio de amparo interpuesto por el C. Lucas Perez, contra el C. Receptor del Mineral del Monte, por violacion de garantías, y cree que deben sujetarse á prueba, ya por razon de la duda que traen consigo, cuanto porque así lo ofrece el solicitante.

Por estas dos razones y con fundamento de los artículos 10 y 11 de la ley de la materia, esta Promotoría pide al Juzgado, se sirva abrir este negocio á prueba por el término que señalan dichos artículos.

Pachuca, Marzo 22 de 1873.—Firmado.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 1º de 1873.—*F. Briseño.*

Alegato del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal; dice: que el C. Lucas Perez, presentó ocurso el 12 de Mayo próximo pasado, dando por causales, que el día 5 de Febrero último, cuando estaba para terminar su expendio de pulque, un guarda de la Receptoría del Mineral del Monte, declaró que habia hecho contrabando, recojiéndole del meson donde posaba, tres cueros llenos, otros vacios, y dos burros que el C. Receptor le embargó, porque no hizo el pago de ocho pesos setenta y cinco centavos, importe de derechos dobles. Añade por último, que siendo estos procedimientos con-

trarios á los artículos 20 fracciones 4ª, 21 y 26 de la Constitución general, ocurre al Juzgado de Distrito para su portación.

El informe dado por el C. Receptor, se redujo á hacer saber al Juzgado, que con el expediente formado con motivo del contrabando hecho por el quejoso, se había dado cuenta al C. Administrador de rentas de Distrito. Con este informe, el susento pidió se sujetase á prueba el juicio y se pidiera copia del expediente, y ya entonces dictamina sobre lo principal.

Una vez hecho esto y previo exámen del relacionado documento, cree el Promotor que la solicitud es improcedente.

Consta de las diligencias que fueron practicadas en el Mineral del Monte (fojas 1, 2, 3 y 4 del cuaderno de pruebas,) que el guarda C. Juan Straffou, se presentó al C. Receptor el día 6 de Febrero, dando parte de haber aprehendido nueve burros cargados con pulque.

Consta que el mismo día fué tomada su declaración al solicitante; consta igualmente que los dos burros fueron detenidos hasta tanto se aseguraran los derechos aduanales, y consta por último, que los ocho pesos setenta y cinco centavos, que importaron los derechos dobles por el contrabando, se hallan en depósito de la autoridad judicial.

No constan otras constancias que justifiquen la solicitud del C. Lucas Percz, por cuya razón debe tenerse por cierto, que ni se le ha aplicado una pena, ni mucho menos que se hayan omitido las formalidades de un juicio, conforme está prevenido por los artículos 20, 21 y 26 de la Constitución general.

Por tales razones, y fundado en el artículo 16 de la l. y de 20 de Enero de 1869, el Promotor concluye pidiendo se declare que la Justicia federal no ampara ni protege al C. Lucas Percz.

Pachuca, Junio 18 de 1873.—Firmado.
—Macedonio Sanchez.

TOMO V.—PARTE II.

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 19 de 1873.—F. Briseño.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Junio 23 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lucas Percz, contra el Receptor de Rentas del Real del Monte, por haberle embargado dos jumentos, exigido una multa de ocho pesos setenta y cinco centavos y ocasionado varios otros perjuicios, con motivo de haber sido denunciado como defraudador de la alcabala causada por cincuenta y cuatro arrobas de pulque.

Visto el ocurso en que expone el quejoso: que el 5 de Febrero último llegó á aquel Mineral, con objeto de expendir un poco de pulque cuya alcabala pagó; que al día siguiente, en los momentos en que se disponía á salir á expendir nueve arrobas del mismo efecto que le habían sobrado, se presentó el guarda Juan Straffou en la casa de su posada; se apoderó de tres botas llenas del propio líquido y desiete vacías, y se las llevó al C. Receptor de Rentas, quien sin mas datos ni averiguación que el testimonio interesado del guarda, declaró que el quejoso había hecho contrabando y lo condenó al pago de ocho pesos setenta y cinco centavos, con cuya resolución no se conformó; que no habiendo podido depositar aquella suma, entre tanto se ventilaba el negocio en el Juzgado respectivo de hacienda, se le embargaron dos jumentos que no le fueron devueltos sino hasta después de un mes en que verificó el depósito de la expresada cantidad; que tales procedimientos le han causado los perjuicios que menciona y han atacado en su persona las garantías individuales, que supone ser las de los artículos 20 fracción 4ª, 21 y 26 de la Constitución general y que no son realmente, á juzgar por la relación de los hechos, sino las de la fracción 5ª del propio artículo 20 y la de los artículos 21 y 16.

Visto igualmente el informe que sin justificación rindió la autoridad responsable, así como el pedimento fiscal oponiéndose á la concesion del amparo.

Visto por último el expediente formado sobre este particular por el mismo Receptor de Rentas y pedido para esclarecer la verdad de los hechos, del que resulta; primero: que la aprehension de los efectos, materia del contrabando, no se verificó en las calles, plazas ó caminos extraviados, sino en una casa particular; segundo: que el guarda aprehensor procedió sin mandamiento escrito de autoridad alguna; tercero: que aunque el propio guarda denunció un contrabando de cincuenta y cuatro arrobas de pulque (esto es lo que contienen las diez y ocho botas que cargaban nueve jumentos), solo aprehendió nueve, y no comprobó la existencia real de las restantes; cuarto: que el C. Receptor, fundado solamente en la relacion del guarda, pues no consta ni la declaracion del quejoso ni su conformidad con dicha relacion, declaró defraudada la alcabala de las cincuenta y cuatro arrobas de aquel efecto; quinto: que no quedando conforme con esta resolusion el quejoso, y ofreciendo el C. Pablo Cortéz en obvio de los perjuicios que se le seguian con la detencion del arriero, pagar la multa correspondiente á solo las nueve arrobas del pulque aprehendido, el expresado Receptor se negó á ello, y sexto: que este, para garantía de los ocho pesos setenta y cinco centavos que importaba la pena del contrabando, embargó al C. Lucas Perez dos jumentos que no le devolvió sino hasta despues de un mes, en que depositó aquella suma.

Considerando respecto de las garantías de los artículos 20, fraccion 5ª y 21 de la Constitucion; primero: que los procedimientos de los empleados de hacienda en los casos de contrabando, no constituyen un juicio criminal, sino una mera informacion sobre la existencia de los hechos que lo constituyen, y segundo: que la resolusion que en segunda dictan, no importa la imposicion

de la pena, sino simplemente su designacion á la que los interesados pueden ó no sujetarse segun su voluntad, reservándose al Juez de hacienda respectivo, la sustanciacion formal del juicio y la imposicion de la pena propiamente dicha.

Considerando respecto de la garantía del artículo 16; primero: que el contrabando de que se trata no está en el caso de delito infraganti, porque no fué sorprendido en las calles, plazas públicas ó caminos extraviados, caminando sin los requisitos establecidos por las leyes fiscales, sino encontrado en la casa de posada del quejoso, protegida por la inviolabilidad del domicilio; segundo: que no siendo en los casos de delito infraganti, ningun guarda puede aprehender los contrabandos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (artículo 61 del decreto de 28 de Diciembre de 1843 y 16 del Código fundamental); tercero: que en consecuencia, hizo mal el guarda Juan Straffou en haber aprehendido de propia autoridad el pulque y demas objetos que recogió al quejoso; cuarto: que tambien procedió mal el C. Receptor de Rentas al aprobar primero y ordenar despues, sin los requisitos constitucionales, los procedimientos del expresado guarda; quinto: que no habiendo comprobado debidamente aquel empleado, la real perpetracion del delito imputado al quejoso, los derechos del fisco no eran claros ó indudables para el efecto de ejercitar la potestad coactiva, y no hubo por tanto causa bastante para embargar á Perez sus animales, en garantía de la pena correspondiente al fraude; sexto: que la arbitrariedad del propio Receptor sube de punto al considerar, que no habiendo sido aprehendidas sino solo nueve arrobas de pulque, ninguna razon le asistió para cobrar derechos dobles á las cuarenta y seis arrobas restantes, de cuya existencia no hay ni siquiera indicios; sétimo: que si procedió sin justificación en los casos expresados, no lo hizo mejor embargando dos jumentos, cuando

uno solo bastaba para asegurar el pago de los ocho pesos setenta y cinco centavos, y octavo: que en virtud de lo expuesto, es evidente que el Receptor de Rentas del Mineral del Monte infringió al quejoso un ataque en sus intereses, contra las disposiciones del artículo 16 constitucional.

Considerando además; primero: que el objeto de las sentencias de amparo, es reposner las cosas al estado que guardaban antes de violarse la Constitución, (artículo 23 de la ley de 20 de Enero de 1869); segundo: que esta reposición jamás será completa, ni nunca será aplicada sino á medias aquella disposición, si no se condena á la autoridad responsable, al pago de los daños y perjuicios causados á la persona agraviada, por efecto necesario de los actos reclamados, por que el objeto de la ley citada es mantener al individuo en el pleno goce de sus derechos y evitarle el menor perjuicio que pudieran ocasionarle los abusos de las autoridades; tercero: que de la debida aplicación de esa ley, no solamente se ejerce un acto de verdadera y rigurosa justicia, sino que se moraliza la administración pública, pues el temor de la indemnización hará á las autoridades mas solícitas y escrupulosas en el cumplimiento de sus deberes, y se dedicarán al estudio del Código fundamental, norma invariable de todos sus actos, no menos que al de las leyes relativas á su empleo, que muchos por desgracia ignoran; y esto á pesar del interés que demuestra el actual Ejecutivo de este Estado, por que los puestos y cargos públicos sean servidos por personas honradas é inteligentes.

Por tanto, y con fundamento de los artículos 1º fracción 1ª y 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta. Primero: la Justicia Federal ampara y protege al C. Lucas Perez contra los actos de que se quejó del C. Receptor de Rentas del Mineral del Monte, por haber violado en la persona de aquel la garantía otorgada por el artículo 16 de la Constitución. Segundo: no se le ampara ni protege por violación de las ga-

rantías de los artículos 20 fracción 5ª y 21 del mismo Código. Tercero: la reposición de las cosas, que por efecto de esta sentencia debe hacerse al estado que guardaban antes de violarse la Constitución, comprende la indemnización de los daños y perjuicios originados á Perez. Hágase saber; publíquese, compúlsense las copias respectivas para el Semanario Judicial, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales.

Así sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito de Hidalgo. Doy fé.
—*Miguel Mejía.*—*Francisco Briseño.*

Es copia que certifico. Pachuca, Junio 28 de 1873.—*Francisco Briseño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 18 de 1873. Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lucas Perez contra los procedimientos del Receptor de rentas del Mineral del Monte del Estado de Hidalgo, á consecuencia de habérsele aprehendido algunas arrobas de pulque que con otras que ya habían expendido, aseguró el guarda aprehensor que había introducido el quejoso á la población referida sin pagar la alcabala correspondiente, de cuyas constancias aparece; 1º: que el 6 de Febrero del corriente año, el guarda Juan Straffou aprehendió en una casa situada á orillas del Mineral del Monte, cinco botas con pulque, asegurando que con otras habían sido introducidas la víspera sin pagar los respectivos derechos; 2º: que para asegurar los que en el caso debían pagarse, el Receptor de Rentas retuvo en calidad de embargados dos burros de los nueve en que se había hecho la introducción; 3º: que pasados algunos días se devolvieron al quejoso los burros embargados, mediante haber depositado el C. Lucas Perez ocho pesos setenta y tres centavos importe de los derechos que se le cobran; 4º:

que esta cantidad quedó en calidad de depósito en el Juzgado conciliador primero del Mineral del Monte, entre tanto la autoridad judicial resuelve lo que corresponda en justicia; 5º y último: que de este negocio tiene ya conocimiento el Juez de 1ª Instancia de Pachuca en calidad de Juez de hacienda del Estado de Hidalgo, siendo de su competencia resolver, si en el caso presente se han causado los derechos y la pena impuestos por el Receptor de Rentas. Considerando: que de estos hechos resulta: que los procedimientos del Receptor de Rentas se han limitado á asegurar los derechos fiscales del Estado, en los términos que previene el art. 42 de la ley de 30 de Setiembre de 1871 del mismo Estado de Hidalgo; que una vez asegurados los derechos fiscales, se ha sometido la decision del negocio, propuesta la no conformidad del interesado, á la autoridad judicial, como lo previene el art. 42 de la ley citada; que por lo mismo, en el caso de que la pena impuesta al quejoso y los derechos que se le cobran no procedan en justicia, está espedito su derecho para hacerlo valer ante la autoridad judicial competente, la que enmendará los agravios que el Receptor de Rentas haya causado al quejoso; que estando como se ha dicho, ajustados los procedimientos del Receptor de Rentas á las leyes del Estado y no importando esos procedimientos la aplicacion de una pena propiamente tal, no se ha atacado en el quejoso la garantía que se consigna en el art. 21 de la Constitucion federal que invoca el mismo quejoso, ni hay aplicacion alguna de la garantía que espresa la fraccion 4ª del art. 20 ni de la prevencion contenida en el art. 26 de la propia Constitucion que tambien invoca como conculcadas en su persona. En virtud de estas consideraciones y con fundamento en lo que dispone el art. 101 de la Constitucion, la Suprema Corte de Justicia reformando la sentencia que pronunció el Juez de Distrito del Estado de Hidalgo en 23 de Junio del presente

año, por la que declaró: Primero: que la Justicia federal ampara y protege al C. Lucas Perez contra los actos de que se quejó del C. Receptor de Rentas del Mineral del Monte, por haber violado en la persona de aquel, la garantía otorgada por el artículo 16 de la Constitucion. Segundo: que no se le ampara ni protege por violacion de las garantías de los artículos 20 frac. 5ª y 21 del mismo Código. Tercero: que la reposicion de las cosas que por efecto de esta sentencia debe hacerse al estado que guardaban antes de violarse la Constitucion, comprende la indemnizacion de los daños y perjuicios originados á Perez, y falla: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lucas Perez contra los procedimientos del Receptor de Rentas del Mineral del Monte, por no aparecer violadas en su persona las garantías que consignan los artículos 20 frac. 4ª, 21 y 26 de la Constitucion de la República.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias. Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—P. Ordoz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—José M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—L. Velasquez.—José García Ramirez.—Luis Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 24 de Setiembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.